



Superintendencia de Puertos y Transporte
República de Colombia

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ - EQUIDAD - EMPLEO

Bogotá, 30/09/2016

Al contestar, favor citar en el asunto este
No. de Registro **20165500986381**



20165500986381

Señor
Representante Legal
JM NACIONAL DE CARGA S.A.S.
CARRERA 32 No. 8 - 55
BOGOTA - D.C.

Respetado (a) Señor (a)

Para su conocimiento y fines pertinentes de manera atenta me permito comunicarle que la Superintendencia de Puertos y Transporte, expidió la (s) resolución (s) Nos. **51726 de 30/09/2016 POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICION DENTRO DE UNA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA A ESA EMPRESA**, para lo cual le anexo fotocopias de la misma.

Sin otro particular.

VALENTINA RUBIANO RODRIGUEZ*
Coordinadora Grupo Notificaciones

Transcribio: FELIPE PARDO PARDO
Revisó: VANESSA BARRERA

GD-REG-27-V1-28-dic-2015

926

REPÚBLICA DE COLOMBIA



Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

RESOLUCIÓN No. 5 17 2 6 DEL 30 SEP 2016

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0 contra la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

En ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confieren el numeral 9 del artículo 44 del Decreto 101 del 2003, los numerales 9, 13 y 14 del Decreto 1016 de 2.000 y los artículos 3 y 6 del Decreto 2741 de 2001 y el artículo 9 del Decreto 173 de 2001

CONSIDERANDO

La Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte según Resolución No. 642 del 5 de enero de 2016, ordenó abrir investigación administrativa contra la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, con base en el informe único de infracción al transporte No 159608 del 15 de noviembre de 2013, por transgredir presuntamente el literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con lo normado en el código 560 de la resolución No. 10800 de 2003 que indica: *"Permitir, facilitar, estimular, propiciar, autorizar o exigir el transporte de mercancías con peso superior al autorizado, sin portar el permiso correspondiente"*, la cual fue notificada por aviso el 07 de Abril de 2015.

Frente a la Resolución No. 642 de fecha 5 de enero de 2016 la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, presentó los correspondientes descargos bajo radicado N° del ;

Mediante Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016 se declaró responsable a la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, y se impuso multa de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$2.947.500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES; la cual fue notificada PERSONALMENTE el día 15 de julio de 2016.

El 1 de agosto de 2016, con radicado No. 2016560058890-2 la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, radicó el recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución No. 22792 de 22 de junio de 2016, interpuesto por el Representante Legal de la empresa.

ARGUMENTOS DEL RECURRENTE

El Representante Legal, de la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS solicita se revoque la Resolución No. 22792 de 22 de junio de 2016, teniendo en cuenta los siguientes argumentos de defensa: *"...Fundamento el recurso, en los siguientes términos:*

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0 contra la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016

1º) En cuanto a la notificación del acto administrativo de la investigación administrativa iniciada contra la empresa que represento mediante Resolución No. 642 del 05 de enero de 2016, que según el acápite denominado 'ACTUACION ADMINISTRATIVA' de la resolución objeto de esta impugnación "Dicho acto administrativo fue notificado por Aviso el día 08 de marzo del 2016", debo muy respetuosamente manifestar al respecto, que no recibí ninguna citación para la notificación personal de este acto administrativo, como tampoco notificación por aviso, y por tal motivo, no se presentó escrito de descargos para desvirtuar o controvertir los cargos formulados y ejercer el derecho fundamental del debido proceso y de defensa que nos asiste (artículo 29 de la Constitución Nacional).

Solicito, por consiguiente, se sirva constatar el cumplimiento perentorio de los términos legales establecidos en los arts. 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, y que los procedimientos de notificación personal y por aviso, se hayan surtido en debida forma, llegando correctamente a su lugar de destino los citatorios y avisos respectivos, que nunca recibimos, con el fin de evitar nulidades procesales.

2º) La empresa que represento, con el fin de transportar 13 huacales con un peso de 14.640 kilogramos, desde Bogotá D.C., con destino a Tulcán (Ecuador), según Factura de Venta No. 193 de fecha 15 de noviembre de 2013, procedió mediante Manifiesto Electrónico de Carga No. 8020-00000073, expedido el día 15 de noviembre de 2013, a despachar los vehículos automotores de placas SPJ-987, marca Chevrotet, modelo 2011, conducido por el Sr. CARLOS ALBERTO USAMA YAMA, y SCR-134, marca Chevrolet, modelo 2010, conducido por el Sr. JHON JAIRO DIAZ MEJIA, transportando el primer vehículo de los nombrados mercancías con un peso de 9.640 kilogramos, y el segundo con un peso de 5.000 kilogramos.

3º) Con el manifiesto electrónico de carga No. 8020-00000073 de fecha 15 de noviembre de 2013 y con la Factura de Venta No. 193 del 15 de noviembre de 2013, cuyas copias me permito anexar, se demuestra que la empresa que represento despachó en los dos vehículos automotores mencionados, mercancías con un peso de total de 14.640 kilogramos, ni más ni menos, y que el sobrepeso endilgado de 695 kilogramos al vehículos de placa SPJ-987, en ningún momento lo permitimos, facilitamos, estimulamos, propiciamos, ni autorizamos y mucho menos se lo exigimos al conductor de este vehículo automotor.

4º) La aludida prueba documental, contradice abiertamente el tiquete de báscula No. 1092614 del 15 de noviembre de 2013, de la estación de peaje báscula chicoral, y a ella nos acogemos para desvirtuar o controvertir el mencionado sobrepeso.

Por los motivos anteriormente expuestos, solicito muy respetuosamente se sirva REVOCAR la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016. (...)

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Revisado el acervo probatorio de la presente actuación administrativa, este Despacho procede a resolver de fondo con base en las pruebas que reposan en el expediente de acuerdo a lo contemplado en el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, entrando a analizar los argumentos del recurrente, así:

Como primera medida es importante dejar en claro que el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo indica que: "Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio." Así las cosas, toda vez que dentro del expediente reposa suficiente material probatorio para llegar a una decisión de fondo conforme a derecho, no se solicitarán pruebas de oficio y serán consideradas las pruebas aportadas al expediente.

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0 contra la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016

Ahora bien, al entrar a analizar los argumentos de defensa de la investigada, éste Despacho se permite aclarar en primera instancia que conforme a los artículos 67, 68 y 69 de la LEY 1437 DE 2011 (Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), los cuales establecen el procedimiento para la citación y notificación de actos administrativos, esta delegada, en cumplimiento de dicho procedimiento, el cual indica que "...Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figure en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación personal. ...". De acuerdo al registro mercantil la dirección fiscal de la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS es CR 32 No. 8 55 de la ciudad de BOGOTA D.C.

De otra parte, es menester señalar que la conducta que se imputó a la mencionada empresa mediante Resolución No. 642 del 5 de enero de 2016, está descrita en el literal d, del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8° de la Resolución 4100 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Resolución 1782 de 2009 y lo señalado en el artículo 1°, código de infracción 560, de la Resolución 10800 de 2003; por consiguiente, la falta imputada se encuentra tipificada en la Ley, y el Informe Único de Infracción de Transporte, permite establecer la existencia del hecho imputado, razón por la cual no son de recibo los argumentos de la defensa.

Ahora como quiera, que el manifiesto de carga reportado en el IUIT, se evidencia que el vehículo infractor de placas SPJ-987, si fue despachado por dicha empresa de transporte terrestre automotor de carga; además se hace necesario aclarar que con respecto al Informe Único de Infracción de Transportes No. 159608 y el Tiquete de Báscula No. 1092614 de fecha 15 de noviembre de 2013, que sirven como fundamento de esta investigación, los cuales son documentos públicos¹ y gozan de autenticidad según los artículos 244 y 257 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), queda probado que el vehículo infractor y despachado por la empresa Investigada al momento de hacer el respectivo control de peso en la Estación de Pesaje Báscula reportada en el IUIT, transportaba carga con un exceso en el peso permitido para los Vehículos designados con la Categoría C2.

En estos términos, la autenticidad del documento público es un aspecto relevante, puesto que el mérito probatorio de tal documento está en función de su autenticidad, por lo tanto, es claro que del mismo se desprende datos tales como: la empresa transportadora que expide el manifiesto de carga, el número de tiquete de bascula de pesaje del vehículo y la autoridad competente que lo suscribe, en el marco de los protocolos que exige la legislación.

De otra parte, es necesario advertir que el Informe Único de Infracciones de Transporte es un documento público², el cual es definido por los artículos 244 y 257 del Código General del Proceso como: **Artículo 244:** "Los documentos públicos y los privados

¹ El Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en su artículo 243 define el documento público de la siguiente forma: "Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública".

² El Código de General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en su artículo 243 define el documento público de la siguiente forma: "Documento público es el otorgado por funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública".

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0 contra la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016

emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso."

En ese orden, el artículo 257 de misma codificación señala: **Artículo 257:** "Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza."

En estos términos, la autenticidad del documento público es un aspecto de suprema importancia, puesto que el mérito probatorio de tal documento está en función de su autenticidad, por lo tanto, es claro que del mismo se desprenden unos hechos tales como: la empresa transportadora y el sobrepeso, principalmente, circunstancias en contra de la empresa investigada y que en conjunto con las demás pruebas obrantes en el expediente, invierten la carga de la prueba para la empresa, toda vez que es a ella a quien se le impone desvirtuar los mentados hechos.

Este Despacho considera necesario hacer un estudio sobre la carga de la prueba, para lo cual el Código General del Proceso en su artículo 167 establece: "**Artículo 167: CARGA DE LA PRUEBA:** Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. // No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba."

Conforme a lo anterior, la carga de la prueba es la que determina cual de los sujetos procesales deben "proponer, preparar y suministrar las pruebas en un proceso"³, en otras palabras, el principio de la carga de la prueba es el que determina quién debe probar los hechos. En razón de lo anterior, puede decirse que la carga de la prueba "Es el instituto procesal mediante el cual se establece una regla de juicio en cuya virtud se indica al Juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables de su desidia"⁴.

Es así como se concluye, que siendo la prueba la configuración de la simple necesidad de probar para no salir vencido, la encargada de presentarla es la parte que más fácil pueda allegarla.

Finalmente hay que indicar que la Resolución 010800 de 2003, por la cual se reglamenta el formato para el Informe de Infracciones de Transporte de que trata el artículo 54 del Decreto número 3366 del 21 de noviembre de 2003, estableció: "(...)

³ OVALLE FAVELA, José. Derecho procesal civil. México D.F.: Editorial Melo 1991.

⁴ BACRE, Aldo. Teoría general del proceso, Tomo III. Buenos Aires: Abeled Perrot, 1992. 33

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0 contra la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016

estableció que los agentes de control levantarán las infracciones a las normas de transporte en el formato (...) y, **que este informe se tendrá como prueba para el inicio de la investigación administrativa correspondiente** (Subrayado y Negrilla por fuera del Texto)

Así las cosas, el Informe Único de Infracciones del Transporte es un documento público que encuentra su régimen en el Código General del Proceso: **CAPÍTULO IX. – DOCUMENTOS - “Artículo 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTO. (...)** “Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.”

Por otro lado, el documento público por su naturaleza, se presume auténtico y por lo tanto goza de total valor probatorio y no es susceptible de ratificación. En este sentido si hay duda sobre la validez del mismo, el procedimiento pertinente será la Tacha de Falso del documento, como lo establece el artículo 244 Código General del Proceso: **“Artículo 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. (...)** “Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.”

Conforme a lo anteriormente expuesto, queda claro que, tanto el Informe de Infracciones de Transporte como El Tiquete de Báscula al ser documentos otorgados por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, quedan revestidos de autenticidad y son material probatorio suficiente dentro de la investigación administrativa que se adelanta en contra de la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS.

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA INVESTIGADA.

La Constitución Política establece en el artículo 333 que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, sin embargo, las mismas deben desarrollar su actividad bajo los límites establecidos en la Ley, en este contexto la Corte Constitucional ha indicado: (...) *la libre competencia no puede erigirse en derecho absoluto ni en barrera infranqueable para la actividad de intervención del Estado. Esta se debe dar, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de bienes, todo lo cual implica indudables limitaciones, correctivos y controles para la iniciativa particular. Se trata, al fin y al cabo, de realizar fines esenciales del Estado como los de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (Preámbulo y artículo 2º C.P.), en ejercicio de un papel dinámico y activo inherente a su función básica de dirección general de la economía (artículo 334 C.P.) (...)*⁵ De tal manera que dichas limitaciones se encuentran establecidas en la Ley 105 de 1993 la cual establece en el literal e) del artículo 2º y el numeral 2º del artículo 3º, que la seguridad de las personas constituye una prioridad del Sistema y del Sector Transporte, y que la operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad.

⁵ Corte Constitucional, Sentencia C-398 de 1995 del 7 de septiembre de 1995. M.P. Jose Gregorio Hernandez Galindo

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0 contra la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016

Igualmente el Estatuto Nacional de Transporte⁶ indica que el transporte gozará de especial protección estatal y será sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, conforme a los Derechos y Obligaciones que señale el reglamento para cada modo.

En este sentido, la Corte Constitucional, ha señalado: (...) *la norma otorga al legislador la facultad para fijar el régimen jurídico de los servicios públicos, autorizando su prestación directa o indirecta, por parte de comunidades organizadas o por particulares, pero reservando al Estado su regulación, control y vigilancia.*

La operación del transporte público en Colombia es un servicio público, inherente a la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la participación del sector privado. La ley, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política, según el cual todo colombiano puede circular libremente por el territorio nacional, define este servicio como "... una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector [aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre], en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica

Pero además, la ley 336 de 1996, "por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte", en armonía con la ley 105 de 1993, le otorga "El carácter de servicio público esencial..." y resalta la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución, la ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento destaca en su artículo 2° que la seguridad en el servicio, particularmente la relacionada con la protección de los usuarios, "constituye prioridad esencial en la actividad del sector y del sistema de transporte", lo cual se ajusta al mandato constitucional contenido en los artículos 2°, 11, 24, 365 y 366, que le imponen al Estado el deber de proteger la vida e integridad de todas las personas residentes en Colombia (...)

La ley 105 de 1993, establece en su artículo 3, que para acceder a la prestación del servicio público, las empresas, formas asociativas de transporte y de economía solidaria deberán estar habilitadas por el Estado. Igualmente señala que el transporte de carga será prestado por personas naturales o jurídicas debidamente autorizadas por las autoridades y el Gobierno Nacional regulará su funcionamiento.

La ley 336 de 1996, establece que por actividad transportadora se entiende un conjunto organizado de operaciones tendientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, separada o conjuntamente, de un lugar a otro, utilizando varios modos, de conformidad con las autorizaciones expedidas por las autoridades competentes.

El capítulo tercero de la mencionada ley, establece los parámetros para la creación y funcionamiento de las empresas de transporte público, en el que indica que la prestación del servicio público de transporte se prestará por personas naturales o jurídicas legalmente constituidas. Igualmente indica que para prestar dicho servicio las empresas interesadas deberán solicitar y obtener habilitación para operar. Como habilitación se entiende la autorización expedida por la autoridad competente en cada modo de transporte.

⁶ Ley 336 de 1996.

RESOLUCIÓN No. 5 17 7 6 DEL 3 0 SEP 2016

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0 contra la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016

Por su parte la Ley 105 de 1993 establece que el transporte es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados, como bien lo establece artículo 3, numeral 6: **Artículo 3º.- Principios del transporte público.** *El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá por los siguientes principios: 6. DE LA LIBERTAD DE EMPRESA: Para la constitución de empresas o de formas asociativas de transporte no se podrán exigir otros requisitos que los establecidos en las normas legales y en los reglamentos respectivos.*

*Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para acceder a la prestación del servicio público, las empresas, formas asociativas de transporte y de economía solidaria deberán estar habilitadas por el Estado. Para asumir esa responsabilidad, **acreditarán condiciones que demuestren capacidad técnica, operativa, financiera, de seguridad y procedencia del capital aportado.***

Como lo describe la normativa anteriormente citada, para adquirir la empresa la habilitación debe cumplir con los requisitos allí mencionados, de los cuales es importante resaltar la capacidad técnica y operativa, ya que dicha capacidad es inherente a la actividad comercial del transporte de carga en el desarrollo de su objeto social y para la cual fue habilitada, la cual respalda todo el proceso operacional diario que se ejecuta bajo el nombre de las sociedades encaminadas al transporte de carga. Por lo tanto, la habilitación que el Estado otorga a las Empresas, obliga a la empresa de servicio público habilitada a asumir un rol que cumpla con las expectativas propias del mismo, surgiendo para ella el deber jurídico de realizar un comportamiento adecuado a ese rol, es por eso, que si la infracción es cometida en desarrollo de la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, la responsabilidad se le atribuye a la empresa habilitada.

En ese mismo sentido, el Consejo de Estado indico, sobre la responsabilidad de las empresas en la prestación del servicio público de transporte en la sentencia del 21 de septiembre de 2001⁷

*(...) en torno a las obligaciones de las empresas de transporte y su relación con los propietarios y conductores de los vehículos a ellas afiliados, haya precisado, y ahora se reitera, que "...los propietarios como los conductores, son para efectos del transporte, agentes de la empresa". "...La relación entre la empresa y los automotores vinculados a ella no es meramente nominal, sino material o real, en la medida en que los vehículos son el medio a través del cual ella desarrolla su objeto social...."; y "...**quienes operan los equipos mediante los cuales se presta el servicio, trátense de conductores...o de propietarios de tales equipos, lo hacen en nombre de la empresa, actúan en representación de ella y, por consiguiente, tienen una responsabilidad in vigilando respecto del comportamiento de ellos en el desarrollo de su actividad.** De otra parte, destaca la Sala que la actividad in vigilando no es exclusiva del derecho civil y tiene cabida siempre que se trate del ejercicio de la facultad de VIGILANCIA, que, como en este caso, se le atribuyó a la empresa de transporte (...)*

Con base en lo anteriormente expuesto, este Despacho concluye: La sociedad al estar debidamente habilitada por el Ministerio de Transporte: (i) es responsable de los contratos que se deriven de la prestación del servicio, entre ellos, la relaciones económicas que se pacten con las empresas o particulares al establecer los límites

⁷ Consejo de Estado. Expediente 251872 25000-23-24-000-1999-0545-016792, del 21 de septiembre de 2001. Consejero Ponente. Manuel Santiago Urueta Ayola

Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0 contra la Resolución No. 22792 del 22 de junio de 2016

señalados por la Resolución 4100 de 2004, frente a los límites de peso y carga, en este mismo sentido, lo debe hacer con los conductores, propietarios o poseedores de los vehículos (ii) es responsable de ejercer un control diario sobre los despachos y operaciones que se realicen en torno al desarrollo de su objeto social, en virtud de su capacidad técnica, financiera y operacional que demostró al solicitar la habilitación (iii) es responsable de las situaciones de hecho que generen efectos jurídicos negativos por transgredir la normatividad vigente que regula el transporte (Ley 336 de 1996, Resolución 4100 de 2004, Decreto 173 de 2001 hoy compilado en el Decreto 1079 de 2015) durante la operación del mismo, entiéndase esta, como aquella que inicia desde la suscripción del contrato de transporte hasta la entrega de la carga al destinatario, es decir, que su responsabilidad es permanente y no solo se deriva de la expedición del Manifiesto Único de Carga y el despacho de la carga, ya que su inspección debe ser continua en todo el trayecto de la mercancía, y por lo tanto, debe garantizar que no se alteraren las condiciones inicialmente pactadas y se de cabal cumplimiento al contrato de transporte.

En mérito de lo expuesto, esta Delegada,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión adoptada mediante resolución No.22792 de fecha 22 de junio de 2016, que falla la investigación administrativa adelantada contra la empresa JM NACIONAL DE CARGA SAS, identificada con NIT No. 900526088-0, por lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTICULO SEGUNDO: Conceder el recurso de apelación solicitado por la sancionada y envíese el expediente al despacho del Superintendente de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente resolución por conducto de la Secretaria General de la Superintendencia de Puertos y Transporte al Representante Legal y/o quien haga sus veces de la empresa de servicio público terrestre automotor de carga JM NACIONAL DE CARGA SAS. Identificada con NIT No. 900526088-0 en su domicilio principal en la ciudad de BOGOTA D.C. / BOGOTA en la CR 32 No. 8 55, de conformidad con los artículos 66 y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Copia de la comunicación, deberá ser remitida a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor para que forme parte del respectivo expediente.

Dada en Bogotá D. C, a los 5 1 7 2 6 3 0 SEP 2016

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

LINA MARIA MARGARITA HUARI MATEUS
Superintendente Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor

Revisó: Coordinador Grupo de Investigaciones *UT*
Proyectó: Jose Luis Guarin

Registro Mercantil

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo.

Razón Social	J M NACIONAL DE CARGA S A S
Sigla	
Cámara de Comercio	BOGOTA
Número de Matrícula	0002217535
Identificación	NIT 900526088 - 0
Último Año Renovado	2016
Fecha de Matrícula	20120525
Fecha de Vigencia	99991231
Estado de la matrícula	ACTIVA
Tipo de Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organización	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
Categoría de la Matrícula	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
Total Activos	17000000.00
Utilidad/Perdida Neta	6000000.00
Ingresos Operacionales	0.00
Empleados	0.00
Afiliado	No



Actividades Económicas

* 4923 - Transporte de carga por carretera

Información de Contacto

Municipio Comercial	BOGOTA, D.C. / BOGOTA
Dirección Comercial	CR 32 NO. 8 55
Teléfono Comercial	4148842
Municipio Fiscal	BOGOTA, D.C. / BOGOTA
Dirección Fiscal	CR 32 NO. 8 55
Teléfono Fiscal	
Correo Electrónico	jmcarganacional@gmail.com

Ver Certificado de Existencia y Representación Legal

Ver Certificado de Matrícula Mercantil

Nota: Si la categoría de la matrícula es Sociedad ó Persona Jurídica Principal ó Sucursal por favor solicite el Certificado de Existencia y Representación Legal. Para el caso de las Personas Naturales, Establecimientos de Comercio y Agencias solicite el Certificado de Matrícula

Representantes Legales

CALLE 57
TEL. 4693300-47

Representante Legal y/o Apoderado
JM NACIONAL DE CARGA S.A.S.
CARRERA 32 No. 8 - 55
BOGOTA - D.C.

432
NOMBRE: JIMENA
CALLE 57 No. 8 - 55
TEL. 4693300-47
BOGOTA D.C. 01000

REMISOR
Nombre Razón Social
SUPERINTENDENCIA DE
PUERTOS Y TRANSPORTES
Dirección: Calle 37 No. 28B-2
Ciudad: BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal: 1113113
Envío: RN6477819150C

DESTINATARIO
Nombre Razón Social
JM NACIONAL DE CARGA S.A.
Dirección: Carrera 32 No. 8 - 55
Ciudad: BOGOTA D.C.
Departamento: BOGOTA D.C.
Código Postal: 1113113
Fecha Pre-Admisión: 04/02/05 16:05:46
Código Postal: 1113113

472 Motivos de Devolución		<input checked="" type="checkbox"/> Desconocido		<input type="checkbox"/> No Existe Número	
<input type="checkbox"/> Dirección Errada		<input type="checkbox"/> Rehusado		<input type="checkbox"/> No Reclamado	
<input type="checkbox"/> No Reside		<input type="checkbox"/> Cerrado		<input type="checkbox"/> No Contactado	
<input type="checkbox"/> Fecha 1: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Fallecido		<input type="checkbox"/> Apartado Clausurado	
<input type="checkbox"/> Fecha 2: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Fuerza Mayor		<input type="checkbox"/>	
Nombre del distribuidor: <input type="text"/>		Nombre del distribuidor: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	
C.C. <input type="text"/>		C.C. <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	
Centro de Distribución: <input type="text"/>		Centro de Distribución: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	
Observaciones: <input type="text"/>		Observaciones: <input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	

ESCRIBIR EN ESTE ESPACIO
 RESTANTE

